



Migrantes haitianos: Engañados, rechazados, perseguidos...

(Luciano Campos Garza, pág. 34-36)

Monterrey, N.L.- Al contener la migración de haitianos que fluye hacia el noreste del país, el gobierno de México le hace el trabajo sucio al de Estados Unidos, pero ha dejado que se dispersen en ciudades fronterizas como Acuña, Reynosa y Monterrey, sin darles condiciones mínimas de refugio y dejándolos a expensas de la delincuencia y del contagio por covid.

Procedentes del sur, en caravanas que pasaron filtros de revisión después de que los dejaron salir de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los caribeños se han asentado principalmente en la ciudad texana Del Río, donde han instalado campamentos en espera de obtener una visa de refugiados en Estados Unidos. Desde ahí suelen cruzar hacia Acuña, Coahuila, municipio que ya no sabe dónde alojarlos.

Otros centenares ya no encontraron espacio ahí y se desplazaron a Reynosa, Tamaulipas, donde acampan en plazas y otros espacios públicos, o a Monterrey, donde ya desbordaron las casas de migrantes Indi, en esta capital, y Casanicolás, en Guadalupe.

En estos puntos los migrantes padecen hacinamiento, exposición al contagio de covid y otras enfermedades, además del riesgo de que escaseen alimentos.

Muchos haitianos desconocen por completo su situación migratoria y lo que les espera en el futuro inmediato. Fueron engañados con la promesa de que recibirían asilo en Estados Unidos, cuando ese país tiene cerradas sus puertas, y a los que consiguen pasar los regresan a Haití o a México, donde quedan a su suerte. Por ahora no tienen oportunidad de llegar ante un juez de migración que analice su caso.

Aquí pueden obtener en un mes la visa humanitaria que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) o solicitar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reconozca oficialmente su condición, pero al hacerlo cancelan su posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos, pues los mencionados trámites implican que están seguros en México.

El trámite para que las autoridades mexicanas acepten a un migrante como refugiado puede demorar hasta 10 meses, durante los cuales deben permanecer en los albergues.

En tanto, el problema crece. En Acuña, el alcalde Roberto de los Santos señala que el ayuntamiento no puede atender a 11 mil caribeños que se han establecido en campamentos. Teme que algunos se desesperen e incurran en actividades antisociales, como la delincuencia.



Por su parte la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, dice que los migrantes asentados irregularmente en la plaza frente al puente internacional no aceptan ser censados porque alguien les dijo que se nieguen. Igual que los demás alcaldes que enfrentan la ola migratoria, lamenta que el gobierno federal se desentienda de la situación.

En Guadalupe, Nuevo León, existe un albergue para 120 personas, pero a la ciudad llegaron al menos un millar de haitianos que no cuentan con suficiente atención médica, asesoría legal ni traductores de sus idiomas, francés y créole.

Se estima que en las ciudades de la frontera están varados unos 14 mil migrantes procedentes de Haití. Sin embargo, el delegado del INM en Nuevo León, general José de Jesús Barajas Santos, se negó a declarar sobre esta crisis, y el comisionado de INM, Francisco Garduño Yáñez, llegó a Acuña hasta el miércoles 22 para revisar la situación. El funcionario adelantó que los haitianos fueron engañados para transportarlos a la frontera, pues para seguir su solicitud de refugio deben permanecer en las entidades donde iniciaron el trámite.

Sin atención

El domingo 19 por la mañana, los directivos de la casa Indi, ubicada en la colonia Industrial, de Monterrey, fueron sorprendidos por la llegada de centenares de migrantes que pidieron refugio. Con capacidad para 550 personas, es la casa del migrante más grande del norte y una de las de mayor capacidad en el país. De inmediato se dio atención a todos.

Antonio González Téllez, administrador del refugio, señala que ese día 845 haitianos se sumaron a más de 250 centroamericanos que arribaron antes. El sitio se desbordó. Algunos llegaron de Acuña, donde ya no hallaron acomodo, y otros directamente desde Tapachula, Chiapas.

En casa Indi, sobre la calle Miguel Nieto, donde está la entrada principal, se observa desde el lunes a centenares de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, algunas embarazadas o con niños pequeños y lactantes. Improvisaron cobertizos con sábanas y cobijas, usan como tendedero el puente peatonal Bernardo Reyes y hacen fila para tomar agua de tinacos de plástico.

La ausencia del INM ha provocado que la sociedad civil tome el protagonismo. Tampoco la Secretaría de Salud de Nuevo León se ha hecho presente para atender enfermos ni la Secretaría General de Gobierno para ayudar a los migrantes con los trámites, dice el personal del albergue.

En una oficina de la casa Indi, los abogados les explican pacientemente a las familias que el trámite migratorio demorará casi un año, tan sólo para obtener residencia en México. Pero la mayoría quiere cruzar el Río Bravo, lo que implica otro trayecto de 220 kilómetros al norte.



El administrador González Téllez ya solicitó respaldo de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y de Assylum Access para que sus especialistas vengan a dar charlas y expliquen la situación a los migrantes.

No se sabe cuándo les abrirá la puerta Estados Unidos. Por ahora la única oportunidad que tienen es entregarse en la garita migratoria del lado norte y, antes de ser deportados, pedir el asilo. Así se abre un juicio en el que se determina si pueden regresar a Haití o no.

En la casa Indi a los viajeros se les regala cubrebocas a diario, aunque muchos están apiñados en grupos con el rostro descubierto. Aunque se notificó de cinco sospechosos de estar infectados de covid-19, se les aisló y hasta ahora no se han reportado brotes de la enfermedad.

En Casanicolás, que dirige el padre Luis Eduardo Villarreal en el municipio de Guadalupe, permanecen 98 haitianos que no tuvieron cupo de Acuña. Se acomodaron en los dormitorios y conviven con 22 centroamericanos.

Los migrantes de Haití llegaron a las entidades fronterizas mediante el pago de una cuota desde el sur del país. Es común que al arreglarse con el traficante de personas reciban una clave que les permite avanzar aunque se encuentren a oficiales del INM. Están bien alimentados, ya que el pago cubre un buen trato y que las autoridades no los molesten. Tampoco han sido afectados por delincuentes, pese a que por estos días el Cártel del Golfo hace de la migración uno de sus mejores negocios con el cobro de paso en la frontera de Tamaulipas.

El personal del refugio dice que los haitianos pueden ir a cualquier puesto migratorio en Estados Unidos, donde tengan menos problemas y no se registren tumultos, pero inescrupulosamente todos son amontonados en Acuña para mantenerlos bajo control.

El alcalde de ese municipio, Roberto de los Santos, reconoce que está rebasado. Parte de los 11 mil haitianos que llegaron ahí cruzaron a Del Río, donde permanecen en carpas improvisadas al aire libre y sin servicios, bajo el puente de 600 metros que pasa sobre el Río Bravo y une a las dos ciudades. Allá tienen baños portátiles y reciben una comida diaria, pero algunos cruzan al lado mexicano para recibir de asociaciones civiles alimentos y ropa.

El domingo 19, en Del Río, agentes migratorios estadounidenses arremetieron a caballo y a latigazos contra un grupo de haitianos para obligarlos a regresar al lado mexicano.



Los que están en Acuña primero llegaron a Saltillo, la capital de Coahuila, y recorrieron 500 kilómetros más para llegar a la frontera norte. Se desplazaron de noche y de madrugada, en autobuses turísticos y por líneas de ruta comercial.

Ahora la estrategia municipal para atender la crisis consiste en elaborar un plan con el INM y Seguridad Pública del estado para interceptar los próximos camiones de haitianos y redirigirlos a otras ciudades fronterizas donde puedan atenderlos mejor.

No obstante, esto parece chocar con los planes de Reynosa, donde la panista Maki Ortiz dice que el INM ya comenzó a llevarse a los antillanos a Acuña, porque su municipio no tiene recursos para enfrentar la situación. Por eso hace un llamado al gobierno federal para otorgar más recursos a los municipios fronterizos que atienden a migrantes.

Se estima que actualmente hay en Reynosa 500 haitianos. La alcaldesa Ortiz comenta que 60 de ellos pidieron ir a la frontera coahuilense y los enviaron el lunes. En Reynosa se les ha canalizado a la casa Senda de Vida y algunos están en el campamento de la Plaza de la República, frente al Puente Internacional I Reynosa-Hidalgo, mezclados con centroamericanos.

Como el gobierno federal no ha propuesto soluciones al problema, el municipio ofreció tres terrenos para que ahí se establezcan los viajeros en tránsito, dice la edil.

Entrevistado en Casanicolás, el especialista en derecho migratorio Luis Valencia Puente señala que el INM no detendrá ni regularizará a los haitianos. Si actúa, ocurriría lo que pasó en agosto, en Tapachula, donde provocaron incendios en una estación migratoria.

Explica que los caribeños son demandantes y llegan a ser agresivos, pues exigen atención y utilizan el discurso ya elaborado de que son discriminados por el color de su piel. Los centroamericanos, dice, son distintos, ya que aceptan la ayuda que les dan.

Los centenares de haitianos que dejan Acuña y se van a otras ciudades, como Monterrey, es porque ya van de regreso –dice–. Seguramente querrán volver a buscar el trámite en Estados Unidos, pero saben que no ocurrirá de inmediato y que hay una trampa: si acceden tramitar su refugio allá, les pueden abrir la frontera, pero, ya en territorio estadounidense, los suben a un avión que los regresa a Puerto Príncipe o a Tapachula.

A decir de Valencia Puente, México se limita a contener el flujo migratorio pero lo hace mal y queda en evidencia que fracasó la política que ideó Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su mandato.



A su vez Nelly Morales, directora administrativa de Casanicolás, estima que los haitianos se van a quedar en Monterrey, una ciudad próspera donde los ciudadanos pueden ayudar a los migrantes, porque hay empleos mejor pagados; pero aunque haya trabajo, los que no lo consigan van a inundar los cruceros para pedir caridad.

En su recorrido por Ciudad Acuña, el comisionado del INM, Garduño Yáñez, estuvo en el parque Braulio Fernández e invitó a los migrantes a aceptar el transporte terrestre y aéreo que se les ofrece para regresar a los estados de donde salieron o a su país.

El funcionario federal afirmó que en el lado estadounidense de esta zona fronteriza hay 3 mil 300 haitianos y del lado de Acuña hasta 600, cifras que discrepan de las conocidas hasta ahora. Añadió que por el momento no serán deportados y se irán los que así lo deseen al darse cuenta de que fueron engañados.

Insistió: “Nosotros se los reiteramos en el sur: que no era posible, que Estados Unidos ha señalado que no tiene las condiciones para recibir los flujos migratorios y que, por lo tanto, no llegarán”.

A través de un comunicado, el INM informó que el viernes 17 estableció una mesa de diálogo con representantes de la República de Haití para atender los flujos migratorios irregulares de sus compatriotas en su ingreso y durante su tránsito por el país.

“No queremos más mentiras” en el caso Ayotzinapa

(Gloria Leticia Díaz, pág. 6-8)

Con tristeza, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no oculta la contrariedad que le causa no saber qué pasó con su hijo y sus 42 compañeros desaparecidos de manera forzada la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, luego que hace tres años padres y madres de los jóvenes confiaran en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que bajo su gobierno se esclarecería su paradero.

Integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, surgida del primer decreto presidencial de López Obrador, el 3 de diciembre de 2018, Cristina Bautista reconoce “la voluntad” del mandatario, pero advierte que a la mitad de su gobierno no se ha cumplido la principal demanda de los padres de los jóvenes desaparecidos.

“Lo que le hemos dicho al presidente es que queremos a nuestros hijos de regreso, que cumplan sus sueños que tienen en la vida, pero si ya no están vivos, si ya no están en la tierra, sino bajo tierra, que nos digan a dónde, que sea cierto.



“No queremos más mentiras porque nos llevaron cuatro años con (Enrique) Peña Nieto con puras mentiras, y ahora ¿otra vez? Le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros. Tenemos el derecho de saber de nuestros hijos”, dice Bautista Salvador en entrevista.

Originaria de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacotzingo, en las montañas de Guerrero, Bautista confiesa que los familiares de los estudiantes desaparecidos sí esperaban los resultados de manera pronta tras la firma del decreto presidencial de la comisión especial que coordina el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Pensamos que todo iba a ser rápido, las investigaciones; no creímos que iba pasar más de un año sin saber dónde están nuestros hijos, pero nos equivocamos”, lamenta.

Cristina Bautista repasa lo ocurrido en estos últimos tres años, desde la creación de la Comisión de la Verdad, tras admitir que, a diferencia de la administración anterior, “ya no nos reciben con gases lacrimógenos; ahora nos abren las puertas”.

Sin embargo, aclara que una vez que se instaló la comisión presidencial, el 15 de enero de 2019, “tardamos un año en instalar el equipo (de trabajo). Vimos que, en un principio, la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso entrarle ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y Encinas “tienen voluntad, le echan ganas, la fiscalía se tardó en nombrar al fiscal especial para el Caso Ayotzinapa. Tuvimos que hacer un mitin en junio para que lo nombraran, hay órdenes de aprehensión pendientes, pero la fiscalía no quiere hacerlas cumplir.

Sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de alterar evidencia del caso, “las autoridades están viendo cómo extraditarlo a México –se esconde en Israel–, pero se ha tardado mucho por los papeleos. Quién sabe qué tanto hacen porque él fue el mero responsable de lo que pasó en el Río San Juan, y con (Jesús) Murillo Karam construyeron la mentira histórica. Estamos atorados”.

En Ayutla, el viernes 17, el subsecretario Encinas informó que están pendientes por ejecutar 27 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Cristina Bautista dice que coincide con los demás familiares de las víctimas en que urge ejecutar las órdenes de captura, así como llamar a cuentas a exfuncionarios que pudieron haber obstaculizado la indagatoria y ordenado el cierre precipitado de las investigaciones con la “verdad histórica”.



“Le hemos dicho al presidente que se le pregunte a los responsables... Ahí están Peña Nieto, Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y (Salvador) Cienfuegos, quien no permitió que los expertos entrevistaran a los soldados, qué esconde ahí”.